

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA (pp. 2-24)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA (pp. 25-46)

ANTONIO CARDESA SALZMANN
Investigador postdoctoral
CEDAT / Universitat Rovira i Virgili

Sumario: 1. Consideraciones introductorias. 2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE/ex artículo 226 TCE). 2.1. Conservación de los hábitats y de la flora y fauna. 2.2. Tratamiento de aguas urbanas residuales. 3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE/ex artículo 234 TCE): 3.1. Acceso del público a la información en materia de medio ambiente. 3.2. Acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 3.3. Evaluación del impacto ambiental. 3.4. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 3.5. Movimientos transfronterizos de residuos. 3.6. Seguridad en la biotecnología.

1. Consideraciones introductorias

En el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en diez asuntos relacionados con el Derecho ambiental. Entre ellas, cuatro fueron dictadas en el marco de procedimientos incoados por la Comisión Europea sobre la base del artículo 258 TFUE, en relación con el incumplimiento de varias directivas en materia de conservación de los hábitats y de la flora y fauna, la evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos y el tratamiento de aguas urbanas residuales.

Por otro lado, el Tribunal también ha dictado en dicho período seis sentencias resolviendo peticiones de decisión prejudicial sobre la interpretación de distintas disposiciones de Derecho ambiental de la Unión Europea, en materia de acceso del público a la información y a la justicia en materia de medio ambiente, en materia de evaluación estratégica del impacto medioambiental de determinados proyectos, el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, el movimiento transfronterizo de residuos, y la seguridad de la biotecnología.

2. Recursos por incumplimiento (artículo 258 TFUE/ex artículo 226 TCE)

2.1 Conservación de los hábitats y de la flora y fauna

En el período comprendido en esta crónica, el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el marco de tres recursos presentados por la Comisión Europea contra Estados miembros por el incumplimiento de las obligaciones que les incumben bajo el Derecho de la Unión Europea en materia de conservación de los hábitats y de la flora y fauna.

Por medio de su *sentencia de 9 de junio de 2011, asunto C-383/09, Comisión Europea c. República Francesa*, el Tribunal de Justicia (Sala cuarta) estimó el recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión por el incumplimiento por parte de dicho

Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12.1, d) de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante, Directiva hábitats)¹, en relación con la alarmante situación de conservación de la especie *Cricetus cricetus* (hámster europeo) en la región de Alsacia. De conformidad con la referida disposición de la Directiva hábitats, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa en el área de distribución natural propio de determinadas especies –entre las que se encuentra el hámster europeo– que requieren de una protección especial. Como parte de dicho sistema de protección rigurosa, la letra d) de dicha disposición exige la prohibición del deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia procede a evaluar el resultado y la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes de la República Francesa, en particular, las medidas agro-medioambientales, como el establecimiento de zonas de acción prioritaria (ZAP), para las que se establecía una prohibición absoluta de toda nueva urbanización, así como un porcentaje de superficie destinado a cultivos favorables a la reproducción y descanso del hámster europeo. Sin embargo, pese al establecimiento de tres de esas zonas en la región de Alsacia, los objetivos de porcentajes de superficie de cultivos favorables no se habían alcanzado al vencimiento del plazo indicado en el dictamen motivado de la Comisión Europea, constatándose al mismo tiempo un descenso alarmante de la población del hámster europeo, hasta niveles sensiblemente por debajo del umbral mínimo de población viable para la especie². Asimismo, al margen de las ZAP, las autoridades francesas habían establecido áreas de recolonización, en las que los proyectos de nueva urbanización eran sometidos a evaluación con el fin de minimizar su impacto sobre la especie del hámster europeo. Sin embargo, los proyectos de urbanización inferiores a una hectárea quedaban exentos de toda formalidad en este sentido³. Sobre la base de estas constataciones, que el Tribunal de Justicia considera probadas, declara el incumplimiento del artículo 12.1, d) de la Directiva hábitats por parte de la República Francesa, al no haber adoptado un programa de medidas que permitan una protección rigurosa del hámster europeo.

¹ DO, L 206, de 22 de julio de 1992, p. 7.

² Sentencia, §§ 24-30.

³ Ibid., §35.

En su *sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-90/10, Comisión Europea c. Reino de España*, el Tribunal de Justicia (Sala cuarta) estimó íntegramente el recurso de incumplimiento presentado por la Comisión, en cuyo parecer España —vencido el plazo señalado en el dictamen motivado— incumplía varias disposiciones de la Directiva hábitats. Según se desprende de dicho dictamen, la Comisión consideraba que España incumplía, por un lado, el artículo 4.4 de dicha Directiva, al no haber establecido las prioridades de conservación respecto de las zonas especiales de conservación (ZEC), correspondientes a los lugares de interés comunitario (LIC) de la región biogeográfica macaronésica identificados en la Decisión 2002/11/CE de la Comisión⁴. Por otro lado, la Comisión entendía que España también incumplía las obligaciones que le correspondían de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Directiva hábitats, en la medida en que las distintas autoridades competentes no había adoptado ni aplicado medidas apropiadas de conservación, ni un régimen de protección que evitase el deterioro de los hábitats y la perturbación significativa de las especies en las ZEC correspondientes a los LIC antes mencionados.

En atención a la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en esta materia, el Tribunal de Justicia examina las medidas adoptadas por la Administración General del Estado —competente para designar las ZEC en áreas marinas cuando no existe continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre— y de la Comunidad Autónoma de Canarias, con competencia en todos los demás casos.

Por lo que respecta, en primer lugar, a las ZEC designadas por la Administración General del Estado, el Tribunal constata que la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2009 —en virtud de la cual se designan 25 ZEC— determina las prioridades de conservación a que se refiere el artículo 4.4 de la Directiva. Sin embargo, en la medida en que dicha Orden es sensiblemente posterior al plazo fijado por la Comisión en su dictamen motivado de 26 de junio de 2009, declara fundado el recurso este punto⁵. Por otro lado, al margen del establecimiento de las correspondientes zonas, la Administración General del Estado todavía no había fijado las medidas de conservación y de protección apropiadas en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Directiva hábitats. Según reconocía España en sus alegaciones, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se había limitado a encomendar a una empresa

⁴ DO, L 5, de 9 de enero de 2002, p. 16.

⁵ Sentencia, §§ 26-28.

pública (Tragsatec) la elaboración de los planes e instrumentos de gestión de dichas ZEC. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia también apreció el incumplimiento de España en este aspecto.

En segundo lugar, en relación con las ZEC designadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de sus competencias, el dictamen motivado de la Comisión distinguía entre las ZEC designadas que coinciden con espacios incluidos en la Red Canaria de Espacios Protegidos, y aquéllas otras que no coinciden con espacios incluidos en dicha Red. Respecto del primer conjunto de ZEC —las coincidentes con zonas incluidas en la Red Canaria— el Tribunal de Justicia consideró fundada la alegación de la Comisión, según la cual las prioridades de conservación establecidas para dicha Red no coinciden y no son conformes con los criterios formulados por el artículo 4.4 de la Directiva hábitats. En cuanto al segundo conjunto de ZEC, el Tribunal se limita a constatar que el Decreto del Gobierno de Canarias, de 29 de diciembre de 2009, es posterior al plazo dado por la Comisión para su adopción. Por consiguiente, considera fundado el recurso también en cuanto a este aspecto.

Por último, el Tribunal también estima el recurso en cuanto al incumplimiento de los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Directiva en las ZEC que coinciden con zonas incluidas en la Red Canaria. En particular, considera probado que en algunas de dichas zonas todavía no se han adoptado las medidas de conservación necesarias que contempla el artículo 6.1⁶. Asimismo, constata que a pesar de las medidas en vigor para la protección de las zonas incluidas en la Red Canaria, un número importante de hábitats y de especies presentes en las ZEC en cuestión se hallan en un estado de conservación malo o inadecuado, incumpliendo de esta manera el artículo 6.2⁷. Respecto de las ZEC que no coinciden con la Red Canaria, la falta de adopción de las medidas contempladas en los artículos 6.1 y 6.2 de la Directiva hábitats antes del vencimiento del plazo otorgado en el dictamen motivado conducen al Tribunal a apreciar el recurso también sobre este particular.

Finalmente, en su *sentencia de 24 de noviembre de 2011, asunto C-404/09, Comisión Europea c. Reino de España*, el Tribunal de Justicia (Sala cuarta) estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comisión, sobre la base del ex artículo 226 TCE, por el incumplimiento de varias Directivas ambientales en relación con el impacto de varias

⁶ *Ibid.*, §§ 48, 51 y 52.

⁷ *Ibid.*, §§ 53, 54 y 57.

explotaciones mineras de carbón a cielo abierto en el Bierzo (Castilla y León) sobre la conservación de los hábitats, en particular, del oso pardo (*Ursus arctos*) y el urogallo (*Tetrao urogallus*).

Por un lado, la sentencia declara el incumplimiento por parte de España de las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 5 de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, al haber autorizado dos explotaciones mineras a cielo abierto (las minas de “Nueva Julia” y “Los Ladrones”) sin supeditar la concesión de las autorizaciones a una evaluación que permitiera identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación a cielo abierto sobre la conservación del oso pardo.

Asimismo, la sentencia declara que —a partir de la declaración del Alto Sil como zona de protección especial de conformidad con la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres⁸ en el año 2000— España también había incumplido los apartados 2 a 4 del artículo 6, y del artículo 7 de la Directiva hábitats. Estos incumplimientos encontraban su origen, por un lado, en la autorización de las minas de “Nueva Julia” y “Los Ladrones” sin su previo sometimiento a una evaluación apropiada de sus posibles repercusiones sobre la conservación del urogallo, que acreditase además que no existían soluciones alternativas y que concurrían razones de interés público de primer orden. Tampoco se respetó en el caso de las dos minas citadas el requisito de la comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000. Por otro lado, también se incumplían los artículos 6 y 7 de la Directiva hábitats, al no haberse adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats y las perturbaciones significativas para la conservación del urogallo derivadas de las explotaciones mineras a cielo abierto ubicadas dentro o en las inmediaciones de la zona de protección especial del Alto Sil, en particular, de las minas de “Feixolín”, “Salguero-Prégame-Valdesegadas”, “Fonfría”, “Ampliación de Feixolín” y “Nueva Julia”.

Por último, la sentencia también declara el incumplimiento, a partir de la designación del Alto Sil como lugar de importancia comunitaria en diciembre de 2004, de las obligaciones que incumben a España en virtud del artículo 6.2 de la Directiva hábitats, al no haberse adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats de

⁸ DO, L 103, de 25 de abril de 1979, p.1.

las especies como consecuencia de la explotación de las minas de “Feixolín”, “Fonfría” y “Ampliación de Feixolín”.

2.2. Tratamiento de las aguas residuales urbanas

En su *sentencia de 8 de septiembre de 2011, asunto C-220/10, Comisión Europea c. República Portuguesa*, el Tribunal de Justicia (Sala octava) estimó íntegramente el recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra la República Portuguesa por el incumplimiento de diversas obligaciones derivadas de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas⁹.

Según consta en el dictamen motivado y en el dictamen motivado complementario, la Comisión consideraba que Portugal incumplía en primer lugar varias disposiciones incluidas en el artículo 6 de la Directiva 91/271 al identificar y designar todas las aguas costeras de las islas de Madeira y Porto Santo como “zonas menos sensibles” sin tener debidamente en cuenta los criterios establecidos en el anexo II de dicha Directiva. Asimismo, en relación con lo anterior, consideraba también que Portugal incumplía por consiguiente también las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Directiva, al someter las aguas residuales de Funchal y Câmara de Lobos —aglomeraciones urbanas con un equivalente habitante (e-h) superior a 10000¹⁰— a un tratamiento menos riguroso del exigido antes de su vertido a las aguas costeras de la isla de Madeira.

En segundo lugar, la Comisión consideraba también que Portugal incumplía las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 5 de la Directiva, al no asegurar los estándares requeridos para el tratamiento de las aguas residuales urbanas en una serie de municipios situados en la orilla izquierda del estuario del Tajo, calificado de zona sensible de conformidad con el artículo 5. En uno de dichos municipios —Quinta do Conde— no se disponía además de un sistema completo de colección de las aguas residuales según se exige en el artículo 3 de la Directiva.

Por lo que respecta a la identificación de las aguas costeras de las islas de Madeira y de Porto Santo como “zonas menos sensibles”, el Tribunal de Justicia considera probado que Portugal no puso a disposición de la Comisión ningún elemento anterior a la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado que demostrase que la esa

⁹ DO, L 135, de 30 de mayo de 1991, p. 40.

¹⁰ Art. 6.2 Directiva 91/271/CEE.

calificación de las aguas costeras en cuestión respondía a los criterios fijados en el anexo II de la Directiva 91/271, tal como prescribe su artículo 6.1. Por otro lado, en la apreciación del Tribunal, Portugal tampoco había aportado los estudios globales que requiere el artículo 6.2, inciso segundo, que indicasen que los vertidos de las aguas residuales de Funchal y de Câmara de Lobos podían ser objeto de un tratamiento menos riguroso que el comúnmente prescrito por la Directiva¹¹, al no tener efectos negativos sobre el medio ambiente.

Del mismo modo, en relación con el tratamiento de las aguas residuales urbanas de varios municipios que se encuentran situados en la orilla izquierda del estuario del Tajo, declarado “zona sensible” de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 91/271, el Tribunal considera las insuficiencias y deficiencias técnicas en las instalaciones de depuración de las aguas residuales de dichos municipios¹² —todos ellos aglomeraciones urbanas con un equivalente habitante (e-h) superior a 10000— ponen de relieve el incumplimiento del artículo 5.2. Esta disposición exige que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de ser vertidas en zonas sensibles, de un tratamiento más riguroso que prescrito, con carácter general, en el artículo 4 de la misma Directiva. Asimismo, el Tribunal considera probado en el caso específico de Quinta do Conde, que el sistema colector instalado sólo tenía capacidad para el tratamiento del 50% de las aguas residuales generadas en dicho municipio. Por consiguiente, Portugal también incumplía en relación a dicho municipio su obligación de conformidad con el artículo 3.1.

3. Cuestiones prejudiciales (artículo 267 TFUE/ex artículo 234 TCE)

3.1. Acceso del público a la información en materia de medio ambiente

En su *sentencia de 28 de julio de 2011, asunto C-71/10, Office of Communications c. Information Commissioner*, el Tribunal de Justicia (Sala tercera) da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court del Reino Unido sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental¹³, en el marco de un litigio entre la Office of Communications y el Information Commissioner sobre una solicitud de información

¹¹ Art. 4 Directiva 91/271/CEE.

¹² Sentencia, §§ 35-42.

¹³ DO, L 41, de 14 de febrero de 2003, p. 26.

acerca de la localización exacta de las estaciones de base de telefonía móvil en el Reino Unido.

Desde finales de 2003, el Office of Communication —entidad dependiente del Gobierno del Reino Unido— gestiona una página web (Sitefinder) por medio de la cual se facilita a las personas interesadas información relativa a la ubicación aproximada de las estaciones base de telefonía móvil en dicho país. Esta página web fue establecida como consecuencia de un informe pericial llevado a cabo a petición del Department of Health sobre el impacto de la telefonía móvil en la salud humana, en el que se estableció que la ubicación de las estaciones base y los procedimientos de autorización de las mismas constituían cuestiones de interés público.

En enero de 2005, se solicitaron desde Health Protection Scotland —agencia regional dependiente del National Health Service británico las coordenadas cartográficas de cada estación base para la realización de un estudio con fines epidemiológicos. Sin embargo, el Office of Communication denegó dicha solicitud sobre la base de dos excepciones contempladas en el artículo 4.2 de la Directiva 2003/4. Por un lado, consideró que la divulgación de la información requerida afectaría negativamente a la seguridad pública (artículo 4.2, b), en la medida en que implicaría también dar a conocer las instalaciones utilizadas para dar soporte a la red de radio de la policía y de los servicios de urgencia. Por otro lado, consideraba la Office of Communication que dicha divulgación tendría asimismo una incidencia negativa sobre el disfrute de los derechos de propiedad intelectual de los operadores de telefonía móvil (artículo 4.2, d).

Esta decisión de desestimación fue recurrida ante el Information Commissioner, que la consideró infundada y ordenó al Office of Communication que facilitase la información solicitada. Ésta a su vez recurrió la decisión del Information Commissioner ante el Information Tribunal, que la confirmó, al entender que nada justificaba la denegación de la divulgación de la información que solicitaba el funcionario de la Health Protection Scotland. En particular, el Information Tribunal consideró que, habida cuenta de la información de la que ya disponía el público en general a través de la página web “Sitefinder”, el impacto de la divulgación de la información solicitada sobre la seguridad pública sería poco relevante y no podía prevalecer sobre el interés público en su divulgación. Asimismo, el Information Tribunal reconocía que los operadores de las redes de telefonía móvil son titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las bases de datos que son facilitados a la Office of Communication para la elaboración y el mantenimiento de la página web “Sitefinder”, pero consideraba que dichos derechos no

podían prevalecer sobre el interés público atendido por la divulgación de dicha información.

La decisión del Information Tribunal fue recurrida nuevamente ante la High Court of Justice of England and Wales, Queen Bench's Division (Administrative Court), que la confirmó. Sin embargo, su sentencia fue revocada por la Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), al considerar que si bien era cierto que —considerados de forma aislada e independiente— los respectivos intereses atendidos por las excepciones en las que se basó la decisión denegatoria de la Office of Communication no podían ser considerados suficientes para oponerse al interés público en la divulgación de la información solicitada, sí constituían motivo suficiente para exceptuar dicha regla general si se procedía a su evaluación y ponderación global y en conjunto.

Recurrida de nuevo la sentencia de apelación ante la Supreme Court, ésta planteó la siguiente cuestión prejudicial:

Conforme a la Directiva 2003/4 [...], cuando una autoridad pública posee información medioambiental cuya divulgación tendría efectos negativos sobre diferentes intereses atendidos por varias excepciones [en el presente caso, el interés en la seguridad pública atendido por el artículo 4, apartado 2, letra b) y el interés en los derechos de propiedad intelectual atendido por el artículo 4, apartado 2, letra e)], pero, dicho efecto negativo, considerando cada excepción por separado, no sería de importancia suficiente para prevalecer sobre el interés público en la divulgación, ¿exige además la Directiva una apreciación global de los diferentes intereses atendidos por ambas excepciones y su ponderación en conjunto con el interés público en la divulgación?

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca que de conformidad con el régimen establecido en la Directiva 2003/4, el derecho a la información implica que la divulgación de cualquier información que se solicite debe ser la norma general. Por el contrario, cualquier decisión denegatoria de la autoridad pública que posee información medioambiental debe basarse en los motivos tasados en la Directiva, que deben interpretarse de modo restrictivo, exigiendo que se ponderen los intereses atendidos, respectivamente, por la divulgación de la información, así como por la denegación de la misma.

Precisa a este respecto el Tribunal que, al permitir a los Estados miembros denegar la divulgación de información medioambiental sobre la base de los motivos tasados en el

artículo 4.2 de la Directiva 2003/4, esta disposición “... no impone un método específico de examen de los motivos de denegación”¹⁴.

A este respecto, el Tribunal considera que cuando el artículo 4.2, en la frase segunda de su párrafo segundo establece que “[e]n cada caso concreto, el interés público atendido por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación”, el legislador comunitario exige a las autoridades públicas de los Estados miembros la ponderación de dos conceptos globales, permitiéndose a la autoridad pública competente evaluar cumulativamente los motivos de denegación de la divulgación al llevar a cabo dicha ponderación¹⁵. Añade el Tribunal que el hecho de que los distintos intereses que pueden justificar la denegación de la información medioambiental solicitada estén contemplados separadamente en el artículo 4.2 no es óbice para que se acumulen dichas excepciones a la regla general de divulgación, precisando no obstante que “... el hecho de que se les tome en consideración de modo acumulativo al ponderarlos con los intereses públicos atendidos por la divulgación no puede constituir un motivo de excepción adicional respecto de los enumerados en dicha disposición”¹⁶.

3.2. Acceso a la justicia en materia de medio ambiente

Por medio de su *sentencia de 18 de octubre de 2011, asunto acumulados C-128/09 a C-131/09, C-134/09 y C-135/09, Antoine Boxus y otros c. Région wallonne*, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resolvió sobre un conjunto de peticiones de decisión prejudicial relativas a la interpretación de los artículos 6 y 9 del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998, aprobado en nombre de la entonces Comunidad Europea mediante Decisión 2005/370/CE¹⁷, y de los artículos 1, 5 a 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente¹⁸.

Las peticiones de cuestión prejudicial fueron planeadas en el marco de una serie de recursos planteados ante el Conseil d'État de Bélgica por un grupo de residentes en

¹⁴ Sentencia, § 23.

¹⁵ *Ibid.*, § 28.

¹⁶ *Ibid.*, §§ 30 y 31.

¹⁷ DO, L 124, de 17 de mayo de 2005, p.1.

¹⁸ DO, L 175, de 5 de julio de 1985, p. 40.

zonas colindantes con los aeropuertos de Lieja/Bierset y Charleroi/Bruselas Sud, y con la línea de ferrocarril Bruselas-Charleroi, contra determinadas licencias de obras relativas a dichas instalaciones que habían sido aprobadas por las autoridades administrativas de la Región de Valonia. Se da además la circunstancia que, mientras dichos recursos estaban pendientes de resolución ante dicho tribunal, un Decreto del Parlamento valón —un acto legislativo aprobado por el Parlamento valón y sancionado por el Gobierno regional— de 17 de julio de 2008, ratificaba las licencias impugnadas en el litigio principal, en virtud de “razones imperiosas de interés general”.

Por un lado, el Decreto del Parlamento valón fue recurrido ante la Cour constitutionnelle. Por el otro lado, no obstante, los demandantes en el litigio principal alegaron a su vez ante el Conseil d’État que la ratificación de las licencias impugnadas por medio de un acto legislativo tenía por objeto sustraer los recursos iniciados de la competencia de este último órgano jurisdiccional y de privarles de su interés en la anulación de dichos actos. Ahora bien, según alegaban las demandantes ante el Conseil d’État, el recurso ante la Cour constitutionnelle —única vía de recurso que les quedaba— no era compatible con las exigencias que se derivan, por un lado, del artículo 9 del Convenio de Aarhus, y por otro lado, del artículo 10 bis de la Directiva 85/337, en la medida en que el control jurisdiccional de la Cour constitutionnelle se limita a un control de constitucionalidad de los actos legislativos, pero no abarca un control completo sobre el fondo y sobre la forma de las disposiciones nacionales de Derecho ambiental aplicables. En estas circunstancias, el Conseil d’État planteó cuatro cuestiones prejudiciales, que el Tribunal de Justicia abordó en dos bloques.

Mediante su primera cuestión prejudicial, en esencia, el Conseil d’État deseaba saber si el artículo 1.5 de la Directiva 85/337¹⁹ debe interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva un acto que ratifica licencias previamente concedidas por autoridades administrativas competentes, basándose en la apreciación de razones imperiosas de interés general, y confiriéndoles naturaleza de acto legislativo.

En la apreciación del Tribunal de Justicia, el artículo 1.5 de la Directiva 85/337 sujeta la exclusión de los proyectos del ámbito de aplicación de la Directiva a la concurrencia de

¹⁹ En los términos de dicha disposición, la Directiva 85/337 “... no se aplicará a los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo nacional específico, dado que los objetivos perseguidos por la presente Directiva, incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través del procedimiento legislativo”.

dos requisitos: (1) que se trate de un proyecto detallado adoptado mediante un acto legislativo específico, y (2) que se alcancen los objetivos de la Directiva, incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, a través del procedimiento legislativo.

En cuanto a la concurrencia del primer requisito, considera el Tribunal que no puede considerarse que un acto legislativo adopte un proyecto detallado "... cuando no contenga los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente, o requiera la adopción de otros actos para conferir al titular del proyecto el derecho a realizarlo"²⁰. Por lo que respecta al segundo requisito, el Tribunal considera que el legislador debe disponer de información suficiente en el momento de aprobar el proyecto, información entre la que debe de constar al menos una descripción del proyecto, los datos requeridos para identificar y evaluar sus principales efectos sobre el medio ambiente, así como las medidas previstas para evitar, reducir, y si fuese posible, compensar los efectos adversos significativos. En este sentido, considera el Tribunal que nada obsta en el sentido de la Directiva 85/337 a que el legislador se sirva de información recopilada en el marco de procedimientos administrativos previos. Sin embargo, afirma que "... un acto legislativo que no haga sino 'ratificar' pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a invocar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permite cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de la citada disposición y por lo tanto no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337"²¹. Corresponde por lo demás al juez nacional apreciar la concurrencia de estos requisitos, "... teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción, y en particular, los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios"²².

Por medio de las restantes cuestiones prejudiciales, el Conseil d'État belga deseaba saber si el artículo 9 del Convenio de Aarhus y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337 debían interpretarse en el sentido de que se oponen a que un proyecto sujeto a obligación de evaluación del impacto ambiental sea aprobado mediante un acto legislativo frente al cual no quepa un recurso contra un órgano jurisdiccional u otro

²⁰ Sentencia, § 40.

²¹ *Ibid.*, § 45.

²² *Ibid.*, § 48.

órgano independiente e imparcial establecido por ley, para impugnarlo sobre la base de motivos de fondo y de procedimiento.

A este respecto, el Tribunal de Justicia reafirma la autonomía procesal de los Estados miembros en esta materia, reconociendo que éstos disponen de un amplio margen de apreciación al aplicar tanto el artículo 9 del Convenio de Aarhus, como el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, especialmente por lo que respecta al órgano competente para conocer de los recursos contemplados en dichas disposiciones y las vías procesales para su ejercicio. No obstante, afirma que el efecto útil de dichas disposiciones quedaría en entredicho si —por el mero hecho de adoptarse un proyecto por medio de un acto legislativo que no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 1.5 de la Directiva 85/337— ya no es susceptible de un recurso que permita impugnar su legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento. En este sentido, considera el Tribunal que

... cuando un proyecto comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 6 del Convenio de Aarhus o de la Directiva 85/337 sea adoptado mediante un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo [1.5] de dicha Directiva... debe poder ser objeto de un control, con arreglo a las normas de procedimiento nacionales, por un órgano jurisdiccional o por un órgano independiente e imparcial establecido por la ley.

En el supuesto de que contra dicho acto no existiese recurso alguno de la naturaleza y alcance indicados, correspondería a cualquier órgano jurisdiccional que en el marco de su competencia conociese del asunto ejercer el control descrito en el apartado anterior y sacar las conclusiones oportunas, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo²³.

3.3. Evaluación del impacto ambiental

Por medio de su *sentencia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-295/10, Genovaitė Valčiukienė y otros c. Pakruojis rajono savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras y Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas*, el Tribunal de Justicia (Sala cuarta) resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Vyriausybės administracinis teismas (Lituania) sobre la interpretación de los apartados 2, a), 3 y 5 del artículo 3, y del artículo 11, apartados 1 y 2 de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente²⁴. El litigio principal, del cual traen causa las cuestiones prejudiciales planteadas, enfrentaba, por un lado, a las Sras. Valčiukienė y Pekelienė, el Movimiento Verde de

²³ *Ibid.*, §§ 54 y 55.

²⁴ DO, L 197, de 21 de julio de 2001, p. 30.

Lituania (Lietuvos žaliųjų judėjimas) y los Sres. Girinskis y Arimantas Lašas, y por otro lado, al Consejo del distrito de Pakruojas, así como al Centro de salud pública y al Servicio regional de protección del medio ambiente de Šiauliai, en relación con dos resoluciones adoptadas en marzo y en abril de 2006, por medio de las cuales el Consejo del distrito de Pakruojas aprobó planes para la construcción de sendos complejos inmobiliarios destinados a la cría intensiva de cerdos.

Los demandantes impugnaron la legalidad de ambas resoluciones de aprobación ante el Šiaulių apygardos administracinis teismas (Tribunal administrativo regional de Šiauliai), sobre la base de la falta de la evaluación estratégica de los efectos medioambientales de los planes aprobados que la legislación nacional aplicable (artículo 1.17 de la Ley de protección del medio ambiente) exige en estos casos de las autoridades competentes. El tribunal desestimó el recurso al considerar que de conformidad con el Derecho nacional, el procedimiento de evaluación estratégica de los efectos medioambientales no se aplica a los documentos de ordenación del territorio en los que —como en el caso de los planes aprobados en virtud de las resoluciones impugnadas— sólo se contemple una única actividad económica. En estos casos, consideraba el tribunal, que de conformidad con el artículo 1.10 de la antecitada Ley de protección del medio ambiente, sólo se exigía una evaluación del impacto ambiental de la actividad económica planificada, tal y como había sido efectuada en el caso de autos. En su recurso de apelación ante el tribunal de remisión, los demandantes en el litigio principal alegaron que, de conformidad con la legislación nacional relativa a la ordenación del territorio, cuando —como era el caso en el presente asunto— no se había aprobado todavía ningún documento relativo a la ordenación general del territorio, las autoridades competentes estaban obligadas a elaborar un plan y a efectuar una evaluación estratégica de los efectos medioambientales antes de aprobar y autorizar la construcción de cualquier tipo de proyecto. Además, consideraban que la apreciación del tribunal en la sentencia recurrida, según la cual los planes aprobados mediante las dos resoluciones impugnadas afectaban a una única actividad económica, no se correspondía con la realidad.

En la apreciación del tribunal de remisión, era cierto que la normativa nacional aplicable no obligaba a la realización de la evaluación estratégica de los efectos medioambientales de los planes controvertidos. Sin embargo, en la medida en que dicha

normativa tenía por objeto la transposición de la Directiva 2001/42, el tribunal planteó un seguido de cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad entre ambas.

Tal como afirma el Tribunal de Justicia, en esencia, las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal de remisión tienen por objeto saber si los apartados 2, a), 3 y 5 del artículo 3 de la Directiva 2001/42 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que —como en el asunto del litigio principal— dispensa de la evaluación contemplada en dicha Directiva respecto de planes que definan el aprovechamiento de pequeñas zonas en el ámbito local que contemplen una única actividad económica²⁵.

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que, a la luz del décimo considerando de la Directiva, el artículo 3.2, a)²⁶ debe interpretarse en el sentido de que se aplica igualmente a un plan que, en un solo sector, establezca el marco para un proyecto que contemple una única actividad económica²⁷. Aunque la interpretación conjunta de los apartados 3 y 5 del artículo 3 de la Directiva ofrece un margen de apreciación para la exigencia de la realización de la evaluación medioambiental respecto de planes y programas que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local, en la medida en que pueden dispensar dicha evaluación, a no ser que resulte ‘probable’ que los planes y programas en cuestión tengan efectos medioambientales significativos de conformidad con los criterios establecidos en el anexo II de la Directiva. Sea como fuere, el Tribunal considera que ese margen de apreciación encuentra su límite infranqueable en la obligación de someter en cualquier caso a dicha evaluación aquellos planes que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, debido a sus características y efectos, así como a las zonas que puedan verse afectadas²⁸.

En consecuencia, una normativa nacional que excluya de antemano la totalidad de los planes de una determinada categoría de la obligación de someterse a una evaluación medioambiental sobrepasa dicho margen de apreciación, si no se basa en criterios objetivos pertinentes, tales como “... su objeto, la extensión del territorio que abarcan o

²⁵ Sentencia, § 36.

²⁶ De conformidad con dicha disposición, deben someterse a evaluación medioambiental todos los planes y programas “... que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE...”.

²⁷ Sentencia, §§ 39, 40 y 42.

²⁸ *Ibid.*, §§ 43-46.

la sensibilidad de los espacios naturales afectados...”²⁹. Así pues, considera que las disposiciones mencionadas del artículo 3 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen “... a una normativa nacional ... que dispone de forma tan general y sin examen caso por caso que no se realizará una evaluación con arreglo a dicha Directiva cuando unos planes que definan el aprovechamiento de pequeñas zonas en el ámbito local contemplen una única actividad económica”³⁰.

Mediante las cuestiones tercera a quinta, en esencia, el tribunal de remisión solicitaba orientación al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de los apartados 1 y 2 del artículo 11 de la Directiva 2001/42. En particular, deseaba saber si dichas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que la evaluación del impacto ambiental realizada de conformidad con la Directiva 85/337 dispensa de la obligación de la realización de la evaluación medioambiental bajo la Directiva 2001/42. A este respecto, el Tribunal de Justicia se basa en el tenor literal del artículo 11.2 de la Directiva 2001/42 para concluir que la evaluación llevada a cabo bajo una Directiva, no excluye ni dispensa la obligación de la realización de la evaluación correspondiente bajo la otra, sino que al diferir en varios aspectos, se hace necesario aplicar las exigencias de ambas Directivas de forma acumulativa. No obstante, considera también el Tribunal de Justicia que corresponde en este caso al tribunal de remisión “verificar si una evaluación realizada con arreglo a la Directiva 85/337 puede considerarse como expresión de un procedimiento coordinado o conjunto, y si éste cumple además todos los requisitos de la Directiva 2001/42”, en cuyo caso ya no existiría la obligación de llevar a cabra una nueva evaluación bajo la misma³¹.

3.4. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Por medio de su *sentencia de 15 de septiembre de 2011, asunto C-53/10, Land Hessen c. Franz Mücksch OHG*, el Tribunal de Justicia (Sala primera) responde a una petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht acerca de la interpretación del artículo 12.1 de la Directiva 96/82/CE relativa al control de los

²⁹ *Ibid.*, § 47.

³⁰ *Ibid.*, § 54.

³¹ *Ibid.*, §§ 60-63.

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas³². La petición de decisión prejudicial fue presentada en el marco de un litigio entre el Land Hessen y Franz Mücksch OHG relativo a la apertura de un centro comercial de productos de jardinería en una parcela en la ciudad de Darmstadt, ubicada en las inmediaciones (250 m) de una fábrica de productos químicos propiedad de Merck KgaA. La zona en la que se encuentran la parcela en cuestión, así como las instalaciones de Merck no habían sido objeto de ningún plan urbanístico. No obstante, en estas instalaciones de Merck se emplean sustancias químicas que están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/82.

Atendiendo a la ausencia de un plan urbanístico y a la existencia de diversos locales comerciales en las inmediaciones de dichas instalaciones, la ciudad de Darmstadt emitió a favor de Mücksch una licencia de edificación en fase de anteproyecto (Bauvorentscheid) sobre la base de una competencia reglada, prevista en el artículo 34 Código de la construcción (Baugesetzbuch), que le impide llevar a cabo —por sí misma— la evaluación de la necesidad de mantener las distancias adecuadas a instalaciones en cuya explotación se utilicen sustancias peligrosas.

Merck interpuso recurso administrativo contra dicha licencia de edificación, que fue estimado. Ulteriormente, Mücksch interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución estimatoria del recurso anterior. Tanto el Verwaltungsgericht, como el Verwaltungsgerichtshof en apelación, estimaron el recurso contencioso-administrativo planteado por Mücksch. Finalmente, Merck y el Land Hessen interpusieron recurso de casación ante el Bundesverwaltungsgericht, alegando por lo esencial que la interpretación de la legislación alemana en que se basaba especialmente la sentencia de apelación del Verwaltungsgerichtshof no era conforme con la Directiva 96/82, en especial, su artículo 12.1. En este contexto, el Bundesverwaltungsgericht planteó tres cuestiones prejudiciales.

En primer lugar, el tribunal remitente preguntaba, por lo esencial, si el artículo 12.1 de la Directiva 96/82 debía interpretarse en el sentido de que la obligación de los Estados miembros de velar por que se tenga en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias adecuadas entre los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas, a los que se refiere dicha Directiva, y los edificios frecuentados por el público se impone también a una autoridad pública distinta de la responsable para

³² DO, L 10, de 14 de enero de 1997, p. 13.

decidir sobre el planeamiento y la utilización del suelo, cuya competencia para la expedición de licencias de edificación es de carácter reglado.

Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia se atiene a la letra del párrafo segundo del artículo 12.1 de la Directiva 96/82, en virtud del cual los Estados miembros deben velar “... por que sus políticas de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, y los procedimientos de aplicación de dichas políticas tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias adecuadas...”. La distinción que en el tenor literal de la disposición se hace entre políticas y procedimientos de aplicación lleva al Tribunal a considerar que la obligación establecida en la misma no sólo vincula a las autoridades competentes de la planificación urbanística, sino también a aquellas otras que participan en la gestión directa de las políticas de asignación o utilización del suelo a través de la expedición de licencias de edificación. Afirma que la Directiva impone a las autoridades de los Estados miembros la obligación de respetar el mantenimiento de las distancias adecuadas entre los establecimientos en los que se almacenan o manipulan sustancias peligrosas y los edificios frecuentados por el público en cualquier fase del procedimiento de ejecución de los planes o políticas de utilización del suelo. Añade el Tribunal que, pese a la incuestionable autonomía institucional y procedimental de los Estados miembros, la apreciación y determinación de las distancias adecuadas debe poder llevarse a cabo en todos los niveles decisorios por parte de las autoridades administrativas competentes³³. En particular, por lo que se refiere a los hechos que originaron el litigio principal, el Tribunal considera que —a la luz del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 TFUE— la inexistencia de un plan urbanístico relativo a la zona no eximía a las autoridades de la ciudad de Darmstadt de la obligación de tener en cuenta las distancias adecuadas, ya que de lo contrario se desvirtuaría el efecto útil de la Directiva 96/82³⁴. Concluye, asimismo, que el carácter reglado de la competencia de la ciudad de Darmstadt en esta materia tampoco puede alterar este orden de cosas, atendiendo al principio de interpretación conforme del Derecho nacional —inherente al régimen del Tratado— que requiere del juez nacional que tome en consideración todo el Derecho nacional para apreciar en qué medida puede éste ser objeto de una aplicación que no lleve a un resultado contrario al perseguido por la Directiva controvertida³⁵.

³³ Sentencia, §§ 26 y 27.

³⁴ *Ibid.*, §§ 21 y 22.

³⁵ *Ibid.*, §§ 32 y 33.

Por medio de sus cuestiones segunda y tercera, que el Tribunal de Justicia examina de forma conjunta, el Bundesverwaltungsgericht requería orientación acerca del alcance de la obligación de los Estados miembros de tener en cuenta las distancias adecuadas, establecida en el artículo 12.1 de la Directiva 96/82, en cuanto a dos aspectos: (1) si debe interpretarse en el sentido de que prohíbe emplazar un edificio frecuentado por el público en una zona en la que ya existen varios edificios semejantes frecuentados por el público, que no están a una distancia superior o sensiblemente superior del establecimiento en el que se hayan las sustancias peligrosas; y (2) si se opone a una norma interna que —como en el presente caso— obliga en esas circunstancias a la autorización de dicho emplazamiento, sin que la autoridad competente haya evaluado debidamente los riesgos en la fase de planificación o en la de decisión individual.

Respecto de la primera cuestión, el Tribunal considera que si bien los Estados miembros están obligados a tener en cuenta la necesidad de mantener y —aunque sea de forma implícita— a determinar las distancias adecuadas al diseñar las políticas de asignación o de utilización del suelo, estas distancias no deben constituir el único criterio de autorización o denegación de los proyectos de edificación en función de su localización. Las autoridades competentes tienen en este contexto una facultad de apreciación para integrar otros criterios, que dependen de cada caso concreto, sin por ello dejar de dar pleno efecto útil a la necesidad de mantener las distancias adecuadas³⁶. A este respecto, subraya que el matiz incorporado en el tenor literal de la disposición interpretada, de conformidad con la cual las distancias adecuadas deben ser tenidas en cuenta “a largo plazo”, denota un cierto respeto del *statu quo* existente. Así pues, las autoridades competentes no podrían imponer el respecto de dichas distancias “... a las urbanizaciones ya existentes cuando aquéllas se fijan por primera vez en una fase posterior”. En este sentido, señala que “... esta expresión debe entenderse como una exigencia de preservar dichas distancias donde ya han sido respetadas y de introducirlas en el futuro, como objetivo a largo plazo, donde aún no se han aplicado”³⁷.

Respecto de la segunda cuestión suscitada, el Tribunal de Justicia acoge el criterio según el cual la facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros no puede interpretarse de modo que les permita hacer abstracción de la toma en consideración de las distancias adecuadas. Por consiguiente, considera que el artículo 12.1 de la Directiva

³⁶ *Ibid.*, § 45.

³⁷ *Ibid.*, § 47.

96/82 debe interpretarse en el sentido que se opone a una norma nacional que establece con carácter obligatorio la concesión de autorización de edificación en las circunstancias descritas³⁸.

3.5. *Movimientos transfronterizos de residuos*

Mediante su *sentencia de 10 de noviembre de 2011, asunto C-405/10, Özlem Garenfeld*, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) atendía una petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Bruchsal (Alemania) en el marco de un proceso penal seguido contra la Sra. Özlem Garenfeld —administradora de la sociedad ALU-KAT GmbH dedicada a la valorización y eliminación de residuos metálicos—, a quien la Fiscalía acusaba de un delito de tráfico ilícito de residuos de conformidad con el artículo 326 del Código penal alemán (Strafgesetzbuch), por el envío de catalizadores usados de vehículos desde Bruchsal hacia el puerto de Rotterdam (Países Bajos), en vista de su exportación al Líbano.

El tribunal de remisión solicitaba orientación acerca de la interpretación del artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos³⁹, en relación con el Reglamento (CE) nº 1418/2007 de la Comisión, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) nº 1013/2006, a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos⁴⁰. En su acusación, el Ministerio fiscal sostenía que la Sra. Garenfeld sabía que los catalizadores estaban comprendidos en la categoría B1120 del anexo IX del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación, y que en consecuencia, su exportación al Líbano estaba prohibida de conformidad con el artículo 37.2 del Reglamento 1013/2006, interpretado en relación con el Reglamento 1418/2007. No obstante, el tribunal de remisión albergaba dudas acerca de si la exportación de residuos en cuestión al Líbano quedaban prohibidos en toda circunstancia bajo los Reglamentos 1013/2006 y 1418/2007, o si en determinadas circunstancias esa

³⁸ *Ibid.*, § 51.

³⁹ DO, L 190, de 12 de julio de 2006, p. 1.

⁴⁰ DO, L 316, de 4 de diciembre de 2007, p. 6.

exportación podía ser lícita, en cuyo caso no concurrirían los elementos constitutivos del delito imputado a la Sra. Garenfeld.

En particular, el *Amtsgericht Bruchsal* señalaba que en el anexo del Reglamento 1418/2007, los residuos comprendidos en la categoría B1120 del anexo IX del Convenio de Basilea han sido incluidos —respecto de Líbano— por un lado en la columna a), que establece una prohibición de importación, y por otro lado en la columna d), que indica la existencia de procedimientos de control distintos de los contemplados en el Reglamento 1013/2006, a tenor de la legislación nacional aplicable para su importación en dicho país. Por consiguiente, el *Amtsgericht Bruchsal* planteó la siguiente cuestión prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 37 del [Reglamento nº 1013/2006], en relación con el Reglamento [nº 1418/2007], en el sentido de que está prohibido el transporte con destino al Líbano de residuos comprendidos en la categoría B1120 del anexo IX del [Convenio de Basilea]?

Con el objeto de ofrecer al tribunal de remisión los criterios interpretativos necesarios para la correcta aplicación del Derecho de la Unión relevante en el proceso principal, el Tribunal de Justicia parte del recordatorio de la diferenciación que el Reglamento 1013/2006 hace de las exportaciones de residuos destinados a operaciones de eliminación, respecto de las exportaciones destinadas a fines de valorización. En este sentido, pese a que las disposiciones de Derecho de la Unión que han sido objeto de la cuestión prejudicial hacen referencia exclusivamente a la exportación de residuos con fines de valorización, recuerda no obstante que toda exportación de residuos destinados a operaciones de eliminación desde la Unión Europea a terceros países —a excepción de países miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio que sean parte e el Convenio de Basilea— está prohibida por el artículo 34 del Reglamento 1013/2006.

Frente a ello, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento 1013/2006, las exportaciones de residuos con fines de valorización hacia países no sujetos a la Decisión de la OCDE —entre ellos Líbano— están permitidas, a no ser que el país en cuestión las haya prohibido. En relación con ello, el artículo 37.1 exigía que la Comisión, en un plazo de 20 días a partir de la entrada en vigor del Reglamento 1013/2006, enviase una solicitud por escrito a cada uno de los países que no están sujetos a la Decisión de la OCDE, pidiendo la confirmación por escrito de que se podrán exportar los residuos

desde la Unión para operaciones de valorización en dicho país, y, en su caso, a qué procedimiento de control sería sometido en el país de destino.

En su contestación a la solicitud escrita de la Comisión Europea, de 23 de junio de 2007, las autoridades libanesas señalaron inequívocamente que las importaciones desde la Unión Europea de residuos de la categoría B1120 del anexo IX del Convenio de Basilea con fines de valorización estaban prohibidas. Esta información fue tomada en consideración en la elaboración del Reglamento 1418/2007, al incluir respecto del Líbano los residuos de la categoría B1120 en la columna a) de su anexo. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluye que

...la prohibición de exportar residuos comprendidos en la categoría B1120 al Líbano es consecuencia, en el caso de autos, de que su importación en este tercer Estado está prohibida por este último, de modo que la prohibición de exportación se impone, por una parte, en virtud del artículo 37 del Reglamento nº 1013/2006 y de la mención de esta categoría de residuos en la columna a) del anexo del Reglamento nº 1418/2007 en la rúbrica "Líbano", ... y por otra, ..., en virtud del artículo 36, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 1013/2006.

Por lo que respecta a las dudas albergadas por el Amtsgericht Bruchsal sobre la inclusión simultánea de dicha categoría de residuos respecto de Líbano en la columna d) del anexo del Reglamento 1418/2007, que indica la existencia de otros procedimientos de control que se seguirán en el país de destino a tenor de la legislación nacional aplicable, el Tribunal de Justicia se atiene a las explicaciones facilitadas por la Comisión Europea, que adujo que la inclusión en la columna d) era consecuencia de la reserva formulada por las autoridades libanesas en su escrito de 23 de junio de 2007 en relación con las consecuencias que se pueden extraer de posibles divergencias en las codificaciones que corresponden a las categorías de residuos en las legislaciones de la Unión Europea y del Líbano, respectivamente⁴¹. Sin embargo, considera el Tribunal que con independencia de las razones exactas que llevaron a la inclusión de dicha categoría de residuos en la columna d) del anexo del Reglamento 1418/2007, nada cambia respecto de la prohibición clara de la exportación de los mismos desde la Unión Europea hacia el Líbano previamente constatada.

Por consiguiente, en su respuesta a la petición de decisión prejudicial del Amtsgericht Bruchsal, el Tribunal de Justicia concluye que

⁴¹ Sentencia, § 40.

Las disposiciones de los artículos 36, apartado 1, letra f) y 37 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) nº 1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, ... deben interpretarse en el sentido de que la exportación de la Unión Europea al Líbano de residuos destinados a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, que figura en la lista B de la parte 1 del Reglamento nº 1013/2006 está prohibida.

3.6. Seguridad en la biotecnología

Mediante su *sentencia de 6 de septiembre de 2011, asunto C-442/09, Karl Heinz Bablok y otros c. Freistaat Bayern*, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resolvió una petición de cuestión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, en la que solicita criterios de interpretación de algunas disposiciones del Reglamento nº 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente⁴². En su sentencia, el Tribunal de Justicia acoge los argumentos y la solución propuesta por el Abogado General Yves Bot en sus conclusiones relativas al caso, presentadas el 9 de febrero de 2011. En la medida en que su contenido fue abordado en la crónica anterior, nos remitimos a ella⁴³.

⁴² DO, L 268, de 18 de octubre de 2003, p. 1.

⁴³ Vid. A. CARDESA SALZMANN, “Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea”, *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 2011, Vol. II Núm. 1, pp. 22-29.

Sumari: 1. Consideracions introductòries. 2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE / ex article 226 TCE). 2.1. Conservació dels hàbitats i de la flora i fauna. 2.2. Tractament d'aigües urbanes residuals. 3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE / ex article 234 TCE): 3.1. Accés del públic a la informació en matèria de medi ambient. 3.2. Accés a la justícia en matèria de medi ambient. 3.3. Avaluació de l'impacte ambiental. 3.4. Control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 3.5. Moviments transfronterers de residus. 3.6. Seguretat en la biotecnologia.

1. Consideracions introductòries

En el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de novembre de 2011, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència en deu assumptes relacionats amb el Dret ambiental. Entre elles, quatre van ser dictades en el marc de procediments incoats per la Comissió Europea sobre la base de l'article 258 TFUE, en relació amb l'incompliment de diverses directives en matèria de conservació dels hàbitats i de la flora i fauna, l'avaluació de l'impacte ambiental de determinats projectes, i el tractament d'aigües urbanes residuals.

D'altra banda, el Tribunal també ha dictat en aquest període sis sentències resolent peticions de decisió prejudicial sobre la interpretació de diferents disposicions de dret ambiental de la Unió Europea, en matèria d'accés del públic a la informació i a la justícia en matèria de medi ambient, en matèria d'avaluació estratègica de l'impacte mediambiental de determinats projectes, el control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, el moviment transfronterer de residus, i la seguretat de la biotecnologia.

2. Recursos per incompliment (article 258 TFUE / ex article 226 TCE)

2.1 Conservació dels hàbitats i de la flora i fauna

En el període comprès en aquesta crònica, el Tribunal de Justícia ha dictat sentència en el marc de tres recursos presentats per la Comissió Europea contra els Estats membres per l'incompliment de les obligacions que els incumbeixen sota el Dret de la Unió Europea en matèria de conservació de els hàbitats i de la flora i fauna.

Per mitjà de la seva *sentència de 9 de juny de 2011, assumpte C-383/09, Comissió Europea c. República Francesa*, el Tribunal de Justícia (Sala quarta) va estimar el recurs d'incompliment interposat per la Comissió per l'incompliment per part de l'Estat

membre de les obligacions que li incumbeixen en virtut de l'article 12.1, d) de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (en endavant, Directiva hàbitats)¹, en relació amb l'alarmant situació de conservació de l'espècie *Cricetus cricetus* (hàmster europeu) a la regió d'Alsàcia. De conformitat amb la referida disposició de la Directiva hàbitats, els Estats membres han d'adoptar les mesures necessàries per instaurar un sistema de protecció rigorosa en l'àrea de distribució natural propi de determinades espècies —entre les quals hi ha el hámster europeu— que requereixen d'una protecció especial. Com a part d'aquest sistema de protecció rigorosa, la lletra d) d'aquesta disposició exigeix la prohibició del deteriorament o destrucció dels llocs de reproducció o de les zones de descans.

En la seva sentència, el Tribunal de Justícia procedeix a avaluar el resultat i l'eficàcia de les mesures adoptades per les autoritats competents de la República Francesa, en particular, les mesures agro-ambientals, com l'establiment de zones d'acció prioritària (ZAP), per a les quals s'establia una prohibició absoluta de tota nova urbanització, així com un percentatge de superfície destinat a cultius favorables a la reproducció i descans del hámster europeu. No obstant això, malgrat l'establiment de tres d'aquestes zones a la regió d'Alsàcia, els objectius de percentatges de superfície de cultius favorables no s'havien assolit al venciment del termini indicat en el dictamen motivat de la Comissió Europea, constatant-al mateix temps un descens alarmant de la població del hámster europeu, fins a nivells sensiblement per sota del llindar mínim de població viable per a l'espècie². Així mateix, al marge de les ZAP, les autoritats franceses havien establert àrees de recolonització, en què els projectes de nova urbanització eren sotmesos a avaluació per tal de minimitzar el seu impacte sobre l'espècie del hámster europeu. No obstant això, els projectes d'urbanització inferiors a una hectàrea quedaven exempts de tota formalitat en aquest sentit³. Sobre la base d'aquestes constatacions, que el Tribunal de Justícia considera provades, declara l'incompliment de l'article 12.1, d) de la Directiva hàbitats per part de la República Francesa, en no haver adoptat un programa de mesures que permetin una protecció rigorosa del hámster europeu.

En la seva *sentència de 22 de setembre de 2011, assumpte C-90/10, Comissió Europea c. Regne d'Espanya*, el Tribunal de Justícia (Sala quarta) va estimar íntegrament el

¹ DO, L 206, de 22 de juliol de 1992, p. 7.

² Sentència, §§ 24-30.

³ *Ibid.*, §35.

recurs d'incompliment presentat per la Comissió, en el que sembla Espanya —vençut el termini assenyalat en el dictamen motivat— incomplia diverses disposicions de la Directiva hàbitats. Segons es desprèn d'aquest dictamen, la Comissió considerava que Espanya incomplia, d'una banda, l'article 4.4 de la Directiva, en no haver establert les prioritats de conservació respecte de les zones especials de conservació (ZEC), corresponents als llocs d'interès comunitari (LIC) de la regió biogeogràfica macaronèsica identificats en la Decisió 2002/11/CE de la Comissió⁴. D'altra banda, la Comissió entenia que Espanya també incomplia les obligacions que li corresponien d'acord amb els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Directiva hàbitats, en la mesura que les diferents autoritats competents no havia adoptat ni aplicat mesures apropiades de conservació, ni un règim de protecció que evités el deteriorament dels hàbitats i la pertorbació significativa de les espècies en les ZEC corresponents als LIC abans esmentats.

En atenció a la distribució competencial entre l'Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries en aquesta matèria, el Tribunal de Justícia examina les mesures adoptades per l'Administració General de l'Estat —competent per designar les ZEC en àrees marines quan no existeix continuïtat ecològica de l'ecosistema marí amb l'espai natural terrestre— i de la Comunitat Autònoma de Canàries, amb competència en tots els altres casos.

Pel que fa, en primer lloc, a les ZEC designades per l'Administració General de l'Estat, el Tribunal constata que l'Ordre Ministerial de 23 de desembre de 2009—en virtut de la qual es designen 25 ZEC—determina les prioritats de conservació a que es refereix l'article 4.4 de la Directiva. No obstant això, en la mesura en què aquesta Ordre és sensiblement posterior al termini fixat per la Comissió en el seu dictamen motivat de 26 de juny de 2009, declara fundat el recurs aquest punt⁵. D'altra banda, al marge de l'establiment de les corresponents zones, l'Administració General de l'Estat encara no havia fixat les mesures de conservació i de protecció apropiades en els termes dels apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Directiva hàbitats. Segons reconeixia Espanya en les seves al·legacions, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí s'havia limitat a encomanar a una empresa pública (Tragsatec) l'elaboració dels plans i instruments de gestió d'aquestes ZEC. Per tant, el Tribunal de Justícia també va apreciar l'incompliment d'Espanya en aquest aspecte.

⁴ DO, L 5, de 9 de gener de 2002, p. 16.

⁵ Sentència, §§ 26-28.

En segon lloc, en relació amb les ZEC designades per la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les seves competències, el dictamen motivat de la Comissió distingia entre les ZEC designades que coincideixen amb espais inclosos a la Xarxa Canària d'Espais Protegits, i aquelles altres que no coincideixen amb espais inclosos en aquesta Xarxa. Respecte del primer conjunt de ZEC —les coincidents amb zones incloses a la Xarxa Canària— el Tribunal de Justícia va considerar fundada l'al·legació de la Comissió, segons la qual les prioritats de conservació establertes per a aquesta Xarxa no coincideixen i no són conformes amb els criteris formulats per l'article 4.4 de la Directiva hàbitats. Quant al segon conjunt de ZEC, el Tribunal es limita a constatar que el Decret del Govern de Canàries, de 29 de desembre de 2009, és posterior al termini donat per la Comissió per a la seva adopció. Per tant, considera fundat el recurs també pel que fa a aquest aspecte.

Finalment, el Tribunal també estima el recurs pel que fa a l'incompliment dels apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Directiva en les ZEC que coincideixen amb zones incloses a la Xarxa Canària. En particular, considera provat que en algunes d'aquestes zones encara no s'han adoptat les mesures de conservació necessàries que preveu l'article 6.1⁶. Així mateix, constata que tot i les mesures en vigor per a la protecció de les zones incloses a la Xarxa Canària, un nombre important d'hàbitats i d'espècies presents en les ZEC en qüestió es troben en un estat de conservació dolent o inadequat, incomplint de aquesta manera l'article 6.2⁷. Respecte de les ZEC que no coincideixen amb la Xarxa Canària, la manca d'adopció de les mesures que preveuen els articles 6.1 i 6.2 de la Directiva hàbitats abans del venciment del termini atorgat en el dictamen motivat condueixen el Tribunal a apreciar el recurs també sobre aquest particular.

Finalment, en la seva *sentència de 24 de novembre de 2011, assumpte C-404/09, Comissió Europea c. Regne d'Espanya*, el Tribunal de Justícia (Sala quarta) estima parcialment el recurs interposat per la Comissió, sobre la base de l'ex article 226 TCE, per l'incompliment de diverses directives ambientals en relació amb l'impacte de diverses explotacions mineres de carbó a cel obert al Bierzo (Castella i Lleó) sobre la conservació dels hàbitats, en particular, de l'ós bru (*Ursus arctos*) i el gall fer (*Tetrao urogallus*).

⁶ Ibid., §§ 48, 51 i 52.

⁷ Ibid., §§ 53, 54 i 57.

D'una banda, la sentència declara l'incompliment per part d'Espanya de les obligacions que es deriven dels articles 2, 3 i 5 de la Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, en haver autoritzat dues explotacions mineres a cel obert (les mines de "Nueva Julia" i "Los Ladrones") sense supeditar la concessió de les autoritzacions a una avaluació que permetés identificar, descriure i avaluar de manera apropiada els efectes directes, indirectes i acumulatius dels projectes d'explotació a cel obert sobre la conservació de l'ós bru.

Així mateix, la sentència declara que —a partir de la declaració de l'Alt Sil com a zona de protecció especial de conformitat amb la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres⁸ l'any 2000— Espanya també havia incomplert els apartats 2 a 4 del article 6, i l'article 7 de la Directiva hàbitats. Aquests incompliments trobaven el seu origen, d'una banda, en l'autorització de les mines de "Nueva Julia" i "Los Ladrones" sense el seu previ sotmetiment a una avaluació apropiada dels seus possibles repercussions sobre la conservació del gall fer, que acrediti a més que no existien solucions alternatives i que concorrien raons d'interès públic de primer ordre. Tampoc es va respectar en el cas de les dues mines esmentades el requisit de la comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries necessàries per garantir la coherència global de la Xarxa Natura 2000. D'altra banda, també es incomplien els articles 6 i 7 de la Directiva hàbitats, en no haver estat adoptades les mesures necessàries per evitar el deteriorament dels hàbitats i les pertorbacions significatives per a la conservació del gall fer derivades de les explotacions mineres a cel obert ubicades dins o als voltants de la zona de protecció especial de l'Alt Sil, en particular, de les mines de "Feixolín", "Salguero-Prégame-Valdesegadas", "Fonfría", "Ampliación de Feixolín" i "Nueva Julia".

Finalment, la sentència també declara l'incompliment, a partir de la designació de l'Alt Sil com a lloc d'importància comunitària al desembre de 2004, de les obligacions que incumbeixen a Espanya en virtut de l'article 6.2 de la Directiva hàbitats, en no haver estat adoptades les mesures necessàries per evitar el deteriorament dels hàbitats de les espècies com a conseqüència de l'explotació de les mines de "Feixolín", "Fonfría" i "Ampliación de Feixolín".

⁸ DO, L 103, de 25 d'abril de 1979, p.1.

2.2. Tractament de les aigües residuals urbanes

En la seva *sentència de 8 de setembre de 2011, assumpte C-220/10, Comissió Europea c. República Portuguesa*, el Tribunal de Justícia (Sala vuitena) va estimar íntegrament el recurs d'incompliment interposat per la Comissió Europea contra la República Portuguesa per l'incompliment de diverses obligacions derivades de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes⁹.

Segons consta en el dictamen motivat i en el dictamen motivat complementari, la Comissió considerava que Portugal incomplia en primer lloc diverses disposicions incloses en l'article 6 de la Directiva 91/271 en identificar i designar totes les aigües costaneres de les illes de Madeira i Porto Sant com "zones menys sensibles" sense tenir degudament en compte els criteris establerts a l'annex II d'aquesta Directiva. Així mateix, en relació amb l'anterior, considerava també que Portugal incomplia per tant també les obligacions derivades de l'article 5 de la Directiva, en sotmetre les aigües residuals de Funchal i Câmara de Lobos —aglomeracions urbanes amb un equivalent habitant (e-h) superior a 10.000¹⁰— a un tractament menys rigorós de l'exigit abans del seu abocament a les aigües costaneres de l'illa de Madeira. En segon lloc, la Comissió considerava també que Portugal incomplia les obligacions derivades dels articles 3 i 5 de la Directiva, en no assegurar els estàndards requerits per al tractament de les aigües residuals urbanes en una sèrie de municipis situats a la riba esquerra de l'estuari del Tajo, qualificat de zona sensible de conformitat amb l'article 5. En un d'aquests municipis —Quinta do Conde— no es disposava a més d'un sistema complet de col·lecció de les aigües residuals segons s'exigeix en l'article 3 de la Directiva.

Pel que fa a la identificació de les aigües costaneres de les illes de Madeira i de Porto Sant com "zones menys sensibles", el Tribunal de Justícia considera provat que Portugal no va posar a disposició de la Comissió cap element anterior a l'expiració del termini fixat en el dictamen motivat que demostrés que la aquesta qualificació de les aigües costaneres en qüestió responia als criteris fixats en l'annex II de la Directiva 91/271, tal com prescriu l'article 6.1. D'altra banda, en l'apreciació del Tribunal, Portugal tampoc havia aportat els estudis globals que requereix l'article 6.2, incís segon, que indiquessin que els abocaments de les aigües residuals de Funchal i de Câmara de

⁹ DO, L 135, de 30 de maig de 1991, p. 40.

¹⁰ Art. 6.2 Directiva 91/271/CEE.

Lobos podien ser objecte d'un tractament menys rigorós que el comunament prescrit per la Directiva¹¹, en no tenir efectes negatius sobre el medi ambient.

De la mateixa manera, en relació amb el tractament de les aigües residuals urbanes de diversos municipis que es troben situats a la riba esquerra del estuari del Tajo, declarat “zona sensible” de conformitat amb l'article 5 de la Directiva 91/271, el Tribunal considera les insuficiències i deficiències tècniques en les instal·lacions de depuració de les aigües residuals d'aquests municipis¹² —tots ells aglomeracions urbanes amb un equivalent habitant (e-h) superior a 10000— posen de relleu l'incompliment de l'article 5.2. Aquesta disposició exigeix que les aigües residuals urbanes que entrin en els sistemes col·lectors siguin objecte, abans de ser abocades en zones sensibles, d'un tractament més rigorós que prescrit, amb caràcter general, en l'article 4 de la mateixa Directiva. Així mateix, el Tribunal considera provat en el cas específic de Quinta do Conde, que el sistema col·lector instal·lat només tenia capacitat per al tractament del 50% de les aigües residuals generades en aquest municipi. Per tant, Portugal també incomplia en relació a aquest municipi la seva obligació segons l'article 3.1.

3. Qüestions prejudicials (article 267 TFUE / ex article 234 TCE)

3.1. Accés del públic a la informació en matèria de medi ambient

En la seva sentència de 28 de juliol de 2011, assumpte C-71/10, *Office of Communications c. Information Commissioner*, el Tribunal de Justícia (Sala tercera) dóna resposta a una qüestió prejudicial plantejada per la Supreme Court del Regne Unit sobre la interpretació de l'article 4 de la Directiva 2003/4/CE relativa a l'accés del públic a la informació mediambiental¹³, en el marc d'un litigi entre l'Office of Communications i l'Information Commissioner sobre una sol·licitud d'informació sobre la localització exacta de les estacions de base de telefonia mòbil al Regne Unit.

Des de finals de 2003, l'Office of Communication —entitat dependent del Govern del Regne Unit— gestiona una pàgina web (Sitefinder) per mitjà de la qual es facilita a les persones interessades informació relativa a la ubicació aproximada de les estacions base de telefonia mòbil en aquest país. Aquesta pàgina web va ser establerta com a conseqüència d'un informe pericial dut a terme a petició del Department of Health sobre

¹¹ Art. 4 Directiva 91/271/CEE.

¹² Sentència, §§ 35-42.

¹³ DO, L 41, de 14 de febrer de 2003, p. 26.

l'impacte de la telefonia mòbil en la salut humana, en el qual es va establir que la ubicació de les estacions base i els procediments d'autorització de les mateixes constituïen qüestions d'interès públic.

El gener de 2005, es van sol·licitar des Health Protection Scotland-agència regional dependent del National Health Service britànic les coordenades cartogràfiques de cada estació base per a la realització d'un estudi amb fins epidemiològics. No obstant això, l'Office of Communication va denegar aquesta sol·licitud sobre la base de dues excepcions que preveu l'article 4.2 de la Directiva 2003/4. D'una banda, va considerar que la divulgació de la informació requerida afectaria negativament la seguretat pública (article 4.2, b), en la mesura que implicaria també donar a conèixer les instal·lacions utilitzades per donar suport a la xarxa de ràdio de la policia i dels serveis d'urgència. D'altra banda, considerava l'Office of Communication que aquesta divulgació tindria també una incidència negativa sobre el gaudi dels drets de propietat intel·lectual dels operadors de telefonia mòbil (article 4.2, d).

Aquesta decisió de desestimació va ser recorreguda davant l'Information Commissioner, que la va considerar infundada i va ordenar a l'Office of Communication que facilités la informació sol·licitada. Aquesta al seu torn va recórrer la decisió del Information Commissioner davant l'Information Tribunal, que la va confirmar, en entendre que res justificava la denegació de la divulgació de la informació que sol·licitava el funcionari de la Health Protection Scotland. En particular, l'Information Tribunal va considerar que, tenint en compte la informació de la que ja disposava el públic en general a través de la pàgina web "Sitefinder", l'impacte de la divulgació de la informació sol·licitada sobre la seguretat pública seria poc rellevant i no podia prevaler sobre l'interès públic en la seva divulgació. Així mateix, l'Information Tribunal reconeixia que els operadors de les xarxes de telefonia mòbil són titulars de drets de propietat intel·lectual sobre les bases de dades que són facilitades a l'Office of Communication per a l'elaboració i el manteniment de la pàgina web "Sitefinder", però considerava que aquests drets no podien prevaler sobre l'interès públic atès per la divulgació d'aquesta informació.

La decisió del Information Tribunal va ser recorreguda novament davant la High Court of Justice of England and Wales, Queen Bench s Division (Administrative Court), que la va confirmar. No obstant això, la seva sentència va ser revocada per la Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), en considerar que si bé era cert que – considerats de forma aïllada i independent– els respectius interessos atesos per les

excepcions en què es va basar la decisió denegatòria de l'Office of Communication no podien ser considerats suficients per oposar-se a l'interès públic en la divulgació de la informació sol·licitada, si constituïen motiu suficient per exceptuar aquesta regla general si es procedia a la seva avaluació i ponderació global i en conjunt.

Recorreguda de nou la sentència d'apel·lació davant la Supreme Court, aquesta va plantejar la següent qüestió prejudicial:

Conforme a la Directiva 2003/4 [...], cuando una autoridad pública posee información medioambiental cuya divulgación tendría efectos negativos sobre diferentes intereses atendidos por varias excepciones [en el presente caso, el interés en la seguridad pública atendido por el artículo 4, apartado 2, letra b) y el interés en los derechos de propiedad intelectual atendido por el artículo 4, apartado 2, letra e)], pero, dicho efecto negativo, considerando cada excepción por separado, no sería de importancia suficiente para prevalecer sobre el interés público en la divulgación, ¿exige además la Directiva una apreciación global de los diferentes intereses atendidos por ambas excepciones y su ponderación en conjunto con el interés público en la divulgación?

En la seva sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea destaca que de conformitat amb el règim establert a la Directiva 2003/4, el dret a la informació implica que la divulgació de qualsevol informació que se sol·liciti ha de ser la norma general. Per contra, qualsevol decisió denegatòria de l'autoritat pública que té informació mediambiental s'ha de basar en els motius taxats en la Directiva, que s'han d'interpretar de forma restrictiva, exigint que es ponderin els interessos atesos, respectivament, per la divulgació de la informació, així com per la denegació d'aquesta.

Precisa a això el tribunal que, en permetre als Estats membres denegar la divulgació d'informació mediambiental sobre la base dels motius taxats en l'article 4.2 de la Directiva 2003/4, aquesta disposició "... no impone un método específico de examen de los motivos de denegación"¹⁴.

Referent a això, el Tribunal considera que quan l'article 4.2, en la frase segona de la seva paràgraf segon estableix que "[e]n cada caso concreto, el interés público atendido por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación", el legislador comunitari exigeix a les autoritats públiques dels Estats membres la ponderació de dos conceptes globals, permetent a l'autoritat pública competent avaluar cumulativament els motius de denegació de la divulgació en dur a terme aquesta ponderació¹⁵. Afegeix el tribunal que el fet que els diferents interessos

¹⁴ Sentència, § 23.

¹⁵ *Ibíd.*, § 28.

que poden justificar la denegació de la informació mediambiental sol·licitada estiguin previstos separatament en l'article 4.2 no és obstacle perquè s'acumulin aquestes excepcions a la regla general de divulgació, precisant, però, que “... *el hecho de que se les tome en consideración de modo acumulativo al ponderarlos con los intereses público atendidos por la divulgación no puede constituir un motivo de excepción adicional respecto de los enumerados en dicha disposición*”¹⁶.

3.2. *Accés a la justícia en matèria de medi ambient*

Per mitjà de la seva *sentència de 18 d'octubre de 2011, assumpte acumulats C-128/09 a C-131/09, C-134/09 i C-135/09, Antoine Boxus i altres c. Région wallonne*, el Tribunal de Justícia (Gran Sala) resolde sobre un conjunt de peticions de decisió prejudicial relatives a la interpretació dels articles 6 i 9 del Conveni d'Aarhus sobre accés a la informació, participació del públic en la presa de decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient, de 25 de juny de 1998, aprovat en nom de la llavors Comunitat Europea mitjançant la Decisió 2005/370/CE¹⁷, i dels articles 1, 5 a 8 i 10 bis de la Directiva 85/337 / CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient¹⁸.

Les peticions de qüestió prejudicial van ser planejades en el marc d'una sèrie de recursos plantejats davant el Conseil d'État de Bèlgica per un grup de residents a zones confrontants amb els aeroports de Lieja/Bierset i Charleroi/Brussel·les Sud, i amb la línia de ferrocarril Brussel·les-Charleroi, contra determinades llicències d'obres relatives a aquestes instal·lacions que havien estat aprovades per les autoritats administratives de la Regió de Valònia. Es dona a més la circumstància que, mentre aquests recursos estaven pendents de resolució davant aquest tribunal, un Decret del Parlament való —un acte legislatiu aprovat pel Parlament való i sancionat pel Govern regional— de 17 de juliol de 2008, ratificava les llicències impugnades en el litigi principal, en virtut de “raons imperioses d'interès general”.

D'una banda, el Decret del Parlament való va ser recorregut davant la Cour constitutionnelle. De l'altra banda, però, els demandants en el litigi principal al·legar al seu torn davant el Conseil d'État que la ratificació de les llicències impugnades per

¹⁶ *Ibid.*, §§ 30 y 31.

¹⁷ DO, L 124, de 17 de maig de 2005, p.1.

¹⁸ DO, L 175, de 5 de juliol de 1985, p. 40.

mitjà d'un acte legislatiu tenia per objecte sostreure els recursos iniciats de la competència d'aquest últim òrgan jurisdiccional i de privar del seu interès en l'anul·lació d'aquests actes. Ara bé, segons al·legaven les demandants davant el Conseil d'État, el recurs davant la Cour constitutionnelle —única via de recurs que els quedava— no era compatible amb les exigències que es deriven, d'una banda, l'article 9 del Conveni d'Aarhus, i d'altra banda, l'article 10 bis de la Directiva 85/337, en la mesura en què el control jurisdiccional de la Cour constitutionnelle es limita a un control de constitucionalitat dels actes legislatius, però no abasta un control complet sobre el fons i sobre la forma de les disposicions nacionals de dret ambiental aplicables. En aquestes circumstàncies, el Conseil d'État va plantejar quatre qüestions prejudicials, que el Tribunal de Justícia va abordar en dos blocs.

Mitjançant la seva primera qüestió prejudicial, en essència, el Conseil d'État desitjava saber si l'article 1.5 de la Directiva 85/337¹⁹ s'ha d'interpretar en el sentit que exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva un acte que ratifica llicències prèviament concedides per autoritats administratives competents, basant-se en l'apreciació de raons imperioses d'interès general, i conferint naturalesa d'acte legislatiu.

En l'apreciació del Tribunal de Justícia, l'article 1.5 de la Directiva 85/337 subjecta l'exclusió dels projectes de l'àmbit d'aplicació de la Directiva a la concurrència de dos requisits: (1) que es tracti d'un projecte detallat adoptat mitjançant un acte legislatiu específic, i (2) que s'assoleixin els objectius de la Directiva, inclòs l'objectiu de la disponibilitat d'informacions, a través del procediment legislatiu.

Quant a la concurrència del primer requisit, el Tribunal que no pot considerar que un acte legislatiu adopti un projecte detallat "*... cuando no contenga los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente, o requiera la adopción de otros actos para conferir al titular del proyecto el derecho a realizarlo*"²⁰. Pel que fa al segon requisit, el Tribunal considera que el legislador ha de disposar d'informació suficient en el moment d'aprovar el projecte, informació entre la qual ha de constar almenys una descripció del projecte, les dades requerides per identificar i avaluar els seus principals efectes sobre el medi ambient, així com les

¹⁹ En els termes d'aquesta disposició, la Directiva 85/337 "*... no se aplicará a los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo nacional específico, dado que los objetivos perseguidos por la presente Directiva, incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través del procedimiento legislativo*".

²⁰ Sentència, § 40.

mesures previstes per evitar, reduir, i si fos possible, compensar els efectes adversos significatius. En aquest sentit, el Tribunal que res obsta en el sentit de la Directiva 85/337 al fet que el legislador es serveixi d'informació recopilada en el marc de procediments administratius previs. No obstant això, afirma que “... *un acto legislativo que no haga sino ‘ratificar’ pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a invocar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permite cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un actos legislativo específico en el sentido de la citada disposición y por lo tanto no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337*”²¹. Correspon a part d'això al jutge nacional apreciar la concurrència d'aquests requisits, “... *teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción, y en particular, los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios*”²².

Per mitjà de les restants qüestions prejudicials, el Conseil d'État belga desitjava saber si l'article 9 del Conveni d'Aarhus i l'article 10 bis de la Directiva 85/337 havien d'interpretar en el sentit que s'oposen al fet que un projecte subjecte a obligació d'avaluació de l'impacte ambiental sigui aprovat mitjançant un acte legislatiu davant el qual no es pugui un recurs contra un òrgan jurisdiccional o un altre òrgan independent i imparcial establert per llei, per impugnar sobre la base de motius de fons i de procediment.

Referent a això, el Tribunal de Justícia reafirma l'autonomia processal dels Estats membres en aquesta matèria, reconeixent que aquests disposen d'un ampli marge d'apreciació en aplicar tant l'article 9 del Conveni d'Aarhus, com l'article 10 bis de la Directiva 85/337, especialment pel que fa a l'òrgan competent per conèixer dels recursos previstos en aquestes disposicions i les vies processals per al seu exercici. No obstant això, afirma que l'efecte útil de les disposicions quedaria en dubte si –pel sol fet d'adoptar un projecte per mitjà d'un acte legislatiu que no s'ajusta als requisits que estableix l'article 1.5 de la Directiva 85/337– ja no és susceptible d'un recurs que permeti impugnar la seva legalitat, pel que fa al fons o pel que fa al procediment. En aquest sentit, el Tribunal que

²¹ *Ibíd.*, § 45.

²² *Ibíd.*, § 48.

... cuando un proyecto comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 6 del Convenio de Aarhus o de la Directiva 85/337 sea adoptado mediante un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo [1.5] de dicha Directiva... debe poder ser objeto de un control, con arreglo a las normas de procedimiento nacionales, por un órgano jurisdiccional o por un órgano independiente e imparcial establecido por la ley.

En el supuesto de que contra dicho acto no existiese recurso alguno de la naturaleza y alcance indicados, correspondería a cualquier órgano jurisdiccional que en el marco de su competencia conociese del asunto ejercer el control descrito en el apartado anterior y sacar las conclusiones oportunas, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo²³.

3.3. *Avaluació de l'impacte ambiental*

Per mitjà de la seva *sentència de 22 de setembre de 2011, assumpte C-295/10, Genovaitė Valčiukienė i altres c. Pakruojis Rajon savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras i Šiaulių regionals aplinkos apsaugos departaments*, el Tribunal de Justícia (Sala quarta) resol una petició de decisió prejudicial plantejada pel Vyriausiasis administracinis teisme (Lituània) sobre la interpretació dels apartats 2, a), 3 i 5 de l'article 3, i l'article 11, apartats 1 i 2 de la Directiva 2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient²⁴. El litigi principal, del qual porten causa les qüestions prejudicials plantejades, s'enfrontava, d'una banda, a les Sres Valčiukienė i Pekelienė, el Moviment Verd de Lituània (Lietuvos žaliųjų judėjimas) i els Srs Girinskis i Arimantas Lasas, i d'altra banda, al Consell del districte de Pakruojas, així com al Centre de salut pública i al Sevei regional de protecció del medi ambient de Šiauliai, en relació amb dues resolucions adoptades el març i l'abril de 2006, per mitjà de les quals el Consell del districte de Pakruojas va aprovar plans per a la construcció de sengles complexos immobiliaris destinats a la cria intensiva de porcs.

Els demandants van impugnar la legalitat de les dues resolucions d'aprovació davant el Šiaulių apygardos administracinis teisme (Tribunal administratiu regional de Šiauliai), sobre la base de la manca de l'avaluació estratègica dels efectes mediambientals dels plans aprovats que la legislació nacional aplicable (article 1.17 de la Llei de protecció del medi ambient) exigeix en aquests casos de les autoritats competents. El tribunal va desestimar el recurs en considerar que de conformitat amb el Dret nacional, el

²³ *Ibíd.*, §§ 54 y 55.

²⁴ DO, L 197, de 21 de juliol de 2001, p. 30.

procediment d'avaluació estratègica dels efectes mediambientals no s'aplica als documents d'ordenació del territori en què —com en el cas dels plans aprovats en virtut de les resolucions impugnades— només es contempli una única activitat econòmica. En aquests casos, considerava el tribunal, que de conformitat amb l'article 1.10 de la abans esmentada Llei de protecció del medi ambient, només s'exigia una avaluació de l'impacte ambiental de l'activitat econòmica planificada, tal com havia estat efectuada en el cas d'actes .

En el seu recurs d'apel·lació davant el tribunal de remissió, els demandants en el litigi principal al·legar que, de conformitat amb la legislació nacional relativa a l'ordenació del territori, quan —com era el cas en aquest assumpte— no s'havia aprovat encara cap document relatiu a l'ordenació general del territori, les autoritats competents estaven obligades a elaborar un pla i a efectuar una avaluació estratègica dels efectes mediambientals abans d'aprovar i autoritzar la construcció de qualsevol tipus de projecte. A més, consideraven que l'apreciació del tribunal en la sentència recorreguda, segons la qual els plans aprovats mitjançant les dues resolucions impugnades afectaven a una única activitat econòmica, no es corresponia amb la realitat.

En l'apreciació del tribunal de remissió, era cert que la normativa nacional aplicable no obligava a la realització de l'avaluació estratègica dels efectes mediambientals dels plans controvertits. No obstant això, en la mesura que aquesta normativa tenia per objecte la transposició de la Directiva 2001/42, el tribunal va plantejar un seguit de qüestions prejudicials sobre la compatibilitat entre ambdues.

Tal com afirma el Tribunal de Justícia, en essència, les dues primeres qüestions prejudicials plantejades pel tribunal de remissió tenen per objecte saber si els apartats 2, a), 3 i 5 de l'article 3 de la Directiva 2001/42 han de ser interpretats en el sentit que s'oposen a una normativa nacional que —com en l'assumpte del litigi principal— dispensa de l'avaluació que preveu la Directiva respecte de plans que defineixin l'aprofitament de petites zones en l'àmbit local que contemplin una única activitat econòmica²⁵.

Referent a això, el Tribunal de Justícia considera que, a la llum del desè considerant de la Directiva, l'article 3.2, a)²⁶ s'ha d'interpretar en el sentit que s'aplica igualment a un

²⁵ Sentència, § 36.

²⁶ De conformitat amb aquesta disposició, s'han de sotmetre a avaluació mediambiental tots els plans i programes “... que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la

pla que, en un sol sector, estableixi el marc per a un projecte que contempli una única activitat econòmica²⁷. Encara que la interpretació conjunta dels apartats 3 i 5 de l'article 3 de la Directiva ofereix un marge d'apreciació per l'exigència de la realització de l'avaluació mediambiental respecte de plans i programes que estableixin l'ús de zones petites a nivell local, en la mesura en què poden dispensar aquesta avaluació, si no és que sigui 'probable' que els plans i programes en qüestió tinguin efectes mediambientals significatius de conformitat amb els criteris establerts a l'annex II de la Directiva. Sigui com sigui, el Tribunal considera que aquest marge d'apreciació troba el seu límit infranquejable en l'obligació de sotmetre en tot cas a aquesta avaluació aquells plans que puguin tenir efectes significatius en el medi ambient, per les seves característiques i efectes, així com a les zones que es puguin veure afectades²⁸.

En conseqüència, una normativa nacional que exclouï per endavant la totalitat dels plans d'una determinada categoria de l'obligació de sotmetre a una avaluació mediambiental sobrepasa aquest marge d'apreciació, si no es basa en criteris objectius pertinents, com ara "*... su objeto, la extensión del territorio que abarcan o la sensibilidad de los espacios naturales afectados...*"²⁹. Així doncs, considera que les disposicions esmentades de l'article 3 de la Directiva s'han d'interpretar en el sentit que s'oposen "*... a una normativa nacional ... que dispone de forma tan general y sin examen caso por caso que no se realizará una evaluación con arreglo a dicha Directiva cuando unos planes que definan el aprovechamiento de pequeñas zonas en el ámbito local contemplen una única actividad económica*"³⁰.

Mitjançant les qüestions tercera a cinquena, en essència, el tribunal de remissió sol·licitava orientació al Tribunal de Justícia sobre la interpretació dels apartats 1 i 2 de l'article 11 de la Directiva 2001/42. En particular, desitjava saber si aquestes disposicions s'han d'interpretar en el sentit que l'avaluació de l'impacte ambiental realitzada de conformitat amb la Directiva 85/337 dispensa de l'obligació de la realització de l'avaluació mediambiental sota la Directiva 2001/42. Referent a això, el

industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE..."

²⁷ Sentència, §§ 39, 40 y 42.

²⁸ *Ibid.*, §§ 43-46.

²⁹ *Ibid.*, § 47.

³⁰ *Ibid.*, § 54.

Tribunal de Justícia es basa en el tenor literal de l'article 11.2 de la Directiva 2001/42 per concloure que l'avaluació duta a terme sota una Directiva, no exclou ni dispensa l'obligació de la realització de l'avaluació corresponent sota la altra, sinó que en diferir en diversos aspectes, es fa necessari aplicar les exigències d'ambdues directives de forma acumulativa. No obstant això, considera també el Tribunal de Justícia que correspon en aquest cas al tribunal de remissió "*verificar si una evaluación realizada con arreglo a la Directiva 85/337 puede considerarse como expresión de un procedimiento coordinado o conjunto, y si éste cumple además todos los requisitos de la Directiva 2001/42*", cas en què ja no existiria l'obligació de dur a cabrum nova avaluació sota la mateixa³¹.

3.4. Control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses

Per mitjà de la seva *sentència de 15 de setembre de 2011, assumpte C-53/10, Land Hessen c. Franz Mücksch OHG*, el Tribunal de Justícia (Sala primera) respon a una petició de decisió prejudicial plantejada pel Bundesverwaltungsgericht sobre la interpretació de l'article 12.1 de la Directiva 96/82/CE relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses³². La petició de decisió prejudicial va ser presentada en el marc d'un litigi entre el Land Hessen i Franz Mücksch OHG relatiu a l'obertura d'un centre comercial de productes de jardineria en una parcel·la en la ciutat de Darmstadt, situada en els voltants (250 m) d'una fàbrica de productes químics propietat de Merck KGaA. La zona on es troben la parcel·la en qüestió, així com les instal·lacions de Merck no havien estat objecte de cap pla urbanístic. No obstant això, en aquestes instal·lacions de Merck es fan servir substàncies químiques que estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 96/82. Atenent a l'absència d'un pla urbanístic i a l'existència de diversos locals comercials en els voltants de les instal·lacions, la ciutat de Darmstadt va emetre a favor de Mücksch una llicència d'edificació en fase d'avantprojecte (Bauvorentscheid) sobre la base d'una competència reglada, que preveu l'article 34 Codi de la construcció (Baugesetzbuch), que li impedeix dur a terme —per si mateixa— l'avaluació de la necessitat de mantenir

³¹ *Ibid.*, §§ 60-63.

³² DO, L 10, de 14 de gener de 1997, p. 13.

les distàncies adequades a instal·lacions en l'explotació s'utilitzin substàncies perilloses.

Merck va interposar recurs administratiu contra aquesta llicència d'edificació, que va ser estimat. Ulteriorment, Mücksch interposar recurs contenciós-administratiu contra la resolució estimatòria del recurs anterior. Tant el Verwaltungsgericht, com el Verwaltungsgerichtshof en apel·lació, estimar el recurs contenciós-administratiu plantejat per Mücksch. Finalment, Merck i el Land Hessen interposar recurs de cassació davant el Bundesverwaltungsgericht, al·legant de manera essencial que la interpretació de la legislació alemanya en què es basava especialment la sentència d'apel·lació del Verwaltungsgerichtshof no era conforme amb la Directiva 96/82, en especial, seu article 12.1. En aquest context, el Bundesverwaltungsgericht plantejar tres qüestions prejudicials.

En primer lloc, el tribunal remitent preguntava, per l'essencial, si l'article 12.1 de la Directiva 96/82 s'havia d'interpretar en el sentit que l'obligació dels Estats membres de vetllar perquè es tingui en compte la necessitat, a llarg termini, de mantenir les distàncies adequades entre els establiments en què hi hagi presents substàncies perilloses, a què es refereix aquesta Directiva, i els edificis freqüentats pel públic s'imposa també a una autoritat pública diferent de la responsable per decidir sobre el planejament i la utilització del sòl, la competència per a l'expedició de llicències d'edificació és de caràcter reglat.

Sobre aquesta qüestió, el Tribunal de Justícia s'até a la lletra del paràgraf segon de l'article 12.1 de la Directiva 96/82, en virtut del qual els Estats membres han de vetllar *"... por que sus políticas de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, y los procedimientos de aplicación de dichas políticas tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias adecuadas..."*. La distinció que en el tenor literal de la disposició es fa entre polítiques i procediments d'aplicació porta el Tribunal a considerar que l'obligació que estableix aquesta no només vincula a les autoritats competents de la planificació urbanística, sinó també a aquelles altres que participen en la gestió directa de les polítiques d'assignació o utilització del sòl a través de l'expedició de llicències d'edificació. Afirmar que la Directiva imposa a les autoritats dels Estats membres l'obligació de respectar el manteniment de les distàncies adequades entre els establiments en què s'emmagatzemen o manipulen substàncies perilloses i els edificis freqüentats pel públic en qualsevol fase del procediment d'execució dels plans o polítiques d'utilització del sòl. Afegeix el tribunal que, tot i la inqüestionable autonomia

institucional i procedimental dels Estats membres, l'apreciació i determinació de les distàncies adequades ha de poder dur a terme en tots els nivells decisoris per part de les autoritats administratives competents³³. En particular, pel que fa als fets que van originar el litigi principal, el Tribunal considera que —a la llum del principi de cooperació lleial establert en l'article 4.3 TFUE— la inexistència d'un pla urbanístic relatiu a la zona no eximia les autoritats de la ciutat de Darmstadt de l'obligació de tenir en compte les distàncies adequades, ja que en cas contrari es desvirtuaria l'efecte útil de la Directiva 96/82³⁴. Conclou, així mateix, que el caràcter reglat de la competència de la ciutat de Darmstadt en aquesta matèria tampoc pot alterar aquest ordre de coses, atenent el principi d'interpretació conforme del dret nacional —inherent al règim del Tractat— que requereix del jutge nacional que prengui en consideració tot el dret nacional per apreciar en quina mesura pot aquest ser objecte d'una aplicació que no porti a un resultat contrari al perseguit per la Directiva controvertida³⁵.

Per mitjà de les seves qüestions segona i tercera, que el Tribunal de Justícia examina de forma conjunta, el Bundesverwaltungsgericht requeria orientació sobre l'abast de l'obligació dels Estats membres de tenir en compte les distàncies adequades, que estableix l'article 12.1 de la Directiva 96/82, pel que fa a dos aspectes: (1) si s'ha d'interpretar en el sentit que prohibeix emplaçar un edifici freqüentat pel públic en una zona on ja hi ha diversos edificis semblants freqüentats pel públic, que no estan a una distància superior o sensiblement superior de l'establiment en què s'hagin les substàncies perilloses, i (2) si s'oposa a una norma interna que —com en aquest cas— obliga en aquestes circumstàncies a l'autorització d'aquest emplaçament, sense que l'autoritat competent hagi avaluat degudament els riscos en la fase de planificació o en la de decisió individual.

Respecte de la primera qüestió, el Tribunal considera que si bé els Estats membres estan obligats a tenir en compte la necessitat de mantenir i —encara que sigui de forma implícita— a determinar les distàncies adequades en dissenyar les polítiques d'assignació o d'utilització del sòl, aquestes distàncies no han de constituir l'únic criteri d'autorització o denegació dels projectes d'edificació en funció de la seva localització. Les autoritats competents tenen en aquest context una facultat d'apreciació per integrar altres criteris, que depenen de cada cas concret, sense per això deixar de donar ple

³³ Sentència, §§ 26 y 27.

³⁴ *Ibid.*, §§ 21 y 22.

³⁵ *Ibid.*, §§ 32 y 33.

efecte útil a la necessitat de mantenir les distàncies adequades³⁶. Referent a això, subratlla que el matís incorporat en el tenor literal de la disposició interpretada, de conformitat amb la qual les distàncies adequades s'han de tenir en compte “*a largo plazo*”, denota un cert respecte del *statu quo* existent. Així doncs, les autoritats competents no podrien imposar el respecte de les distàncies “... *a las urbanizaciones ya existentes cuando aquéllas se fijan por primera vez en una fase posterior*”. En aquest sentit, assenyala que “... *esta expresión debe entenderse como una exigencia de preservar dichas distancias donde ya han sido respetadas y de introducirlas en el futuro, como objetivo a largo plazo, donde aún no se han aplicado*”³⁷.

Respecte de la segona qüestió suscitada, el Tribunal de Justícia acull el criteri segons el qual la facultat d'apreciació de què disposen els Estats membres no es pot interpretar de manera que els permeti fer abstracció de la presa en consideració de les distàncies adequades. Per tant, considera que l'article 12.1 de la Directiva 96/82 s'ha d'interpretar en el sentit que s'oposa a una norma nacional que estableix amb caràcter obligatori la concessió d'autorització d'edificació en les circumstàncies descrites³⁸.

3.5. Moviments transfronterers de residus

Mitjançant la seva sentència de 10 de novembre de 2011, assumpte C-405/10, Özlem Garenfeld, el Tribunal de Justícia (Sala Quarta) atenia una petició de decisió prejudicial plantejada pel Amtsgericht Bruchsal (Alemanya) en el marc d'un procés penal seguit contra la Sra Özlem Garenfeld-administradora de la societat ALU-KAT GmbH dedicada a la valorització i eliminació de residus metàl·lics-, a qui la Fiscalia acusava d'un delictes de tràfic il·lícit de residus de conformitat amb l'article 326 del Codi penal alemany (Strafgesetzbuch), per l'enviament de catalitzadors usats de vehicles des Bruchsal cap al port de Rotterdam (Països Baixos), en vista de la seva exportació al Líban.

El tribunal de remissió sol·licitava orientació sobre la interpretació de l'article 37 del Reglament (CE) n° 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus³⁹, en relació amb el Reglament (CE) n° 1418/2007 de la Comissió, relatiu a l'exportació, amb fins de valorització, de determinats residus enumerats en els annexos

³⁶ Ibid., § 45.

³⁷ Ibid., § 47.

³⁸ Ibid., § 51.

³⁹ DO, L 190, de 12 de juliol de 2006, p. 1.

III o IIIA del Reglament (CE) nº 1013/2006, a determinats països als quals no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el control de els moviments transfronterers de residus⁴⁰. En la seva acusació, el Ministeri fiscal sostenia que la Sra. Garenfeld sabia que els catalitzadors estaven compresos en la categoria B1120 de l'annex IX del Conveni de Basilea sobre el control dels moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, i que en conseqüència, la seva exportació al Líban estava prohibida de conformitat amb l'article 37.2 del Reglament 1013/2006, interpretat en relació amb el Reglament 1418/2007. No obstant això, el tribunal de remissió albergava dubtes sobre si l'exportació de residus en qüestió al Líban quedaven prohibits en tota circumstància sota els reglaments 1013/2006 i 1418/2007, o si en determinades circumstàncies aquesta exportació podia ser lícita, cas en què no concorrieren els elements constitutius del delictes imputat a la Sra. Garenfeld.

En particular, el Amtsgericht Bruchsal assenyalava que en l'annex del Reglament 1418/2007, els residus compresos en la categoria B1120 de l'annex IX del Conveni de Basilea han estat inclosos —respecte del Líban— per una banda a la columna a), que estableix una prohibició d'importació, i d'altra banda a la columna d), que indica l'existència de procediments de control diferents dels que preveu el Reglament 1013/2006, d'acord amb la legislació nacional aplicable per a la seva importació en aquest país. Per tant, el Amtsgericht Bruchsal plantejar la següent qüestió prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 37 del [Reglamento nº 1013/2006], en relación con el Reglamento [nº 1418/2007], en el sentido de que está prohibido el transporte con destino al Líbano de residuos comprendidos en la categoría B1120 del anexo IX del [Convenio de Basilea]?

Per tal d'oferir al tribunal de remissió dels criteris interpretatius necessaris per a la correcta aplicació del dret de la Unió rellevant en el procés principal, el Tribunal de Justícia part del recordatori de la diferenciació que el Reglament 1013/2006 fa de les exportacions de residus destinats a operacions d'eliminació, respecte de les exportacions destinades a fins de valorització. En aquest sentit, tot i que les disposicions de Dret de la Unió que han estat objecte de la qüestió prejudicial fan referència exclusivament a l'exportació de residus amb fins de valorització, recorda però que tota exportació de residus destinats a operacions d'eliminació des de la Unió Europea a tercers països —a

⁴⁰ DO, L 316, de 4 de desembre de 2007, p. 6.

excepció de països membres de l'Associació Europea de Lliure Canvi que siguin part en el Conveni de Basilea— està prohibida per l'article 34 del Reglament 1013/2006.

Davant d'això, de conformitat amb l'article 36 del Reglament 1013/2006, les exportacions de residus amb fins de valorització cap a països no subjectes a la Decisió de l'OCDE —entre ells Líban— estan permeses, llevat que el país en qüestió les hagi prohibit. En relació amb això, l'article 37.1 exigia que la Comissió, en un termini de 20 dies a partir de l'entrada en vigor del Reglament 1013/2006, enviés una sol·licitud per escrit a cada un dels països que no estan subjectes a la Decisió de l'OCDE, demanant la confirmació per escrit que es podran exportar els residus des de la Unió per a operacions de valorització en aquest país, i, si s'escau, a quin procediment de control seria sotmès al país de destinació.

En la seva contestació a la sol·licitud escrita de la Comissió Europea, de 23 de juny de 2007, les autoritats libaneses van assenyalar inequívocament que les importacions des de la Unió Europea de residus de la categoria B1120 de l'annex IX del Conveni de Basilea amb fins de valorització estaven prohibides. Aquesta informació va ser presa en consideració en l'elaboració del Reglament 1418/2007, en incloure respecte del Líban els residus de la categoria B1120 a la columna a) del seu annex. Per tant, el Tribunal de Justícia conclou que

...la prohibición de exportar residuos comprendidos en la categoría B1120 al Líbano es consecuencia, en el caso de autos, de que su importación en este tercer Estado está prohibida por este último, de modo que la prohibición de exportación se impone, por una parte, en virtud del artículo 37 del Reglamento n° 1013/2006 y de la mención de esta categoría de residuos en la columna a) del anexo del Reglamento n° 1418/2007 en la rúbrica "Líbano", ... y por otra, ..., en virtud del artículo 36, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 1013/2006.

Pel que fa als dubtes albergades pel Amtsgericht Bruchsal sobre la inclusió simultània d'aquesta categoria de residus respecte del Líban a la columna d) de l'annex del Reglament 1418/2007, que indica l'existència d'altres procediments de control que es seguiran en el país de destinació d'acord amb la legislació nacional aplicable, el Tribunal de Justícia s'até a les explicacions facilitades per la Comissió Europea, que va aduir que la inclusió a la columna d) era conseqüència de la reserva formulada per les autoritats libaneses en el seu escrit de 23 de juny de 2007 en relació amb les conseqüències que es poden extreure de possibles divergències en les codificacions que corresponen a les categories de residus en les legislacions de la Unió Europea i del

Líban, respectivament⁴¹. No obstant això, el Tribunal considera que amb independència de les raons exactes que van portar a la inclusió d'aquesta categoria de residus a la columna d) de l'annex del Reglament 1418/2007, res canvia respecte de la prohibició clara de l'exportació dels mateixos des de la Unió Europea cap al Líban prèviament constatada.

Per tant, en la seva resposta a la petició de decisió prejudicial del Amtsgericht Bruchsal, el Tribunal de Justícia conclou que

Las disposiciones de los artículos 36, apartado 1, letra f) y 37 del Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n° 1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos, ... deben interpretarse en el sentido de que la exportación de la Unión Europea al Líbano de residuos destinados a operaciones de valorización comprendidos en la categoría B1120, que figura en la lista B de la parte 1 del Reglamento n° 1013/2006 está prohibida.

3.6. Seguretat en la biotecnologia

Mitjançant la seva sentència de 6 de setembre de 2011, assumpte C-442/09, *Karl Heinz Bablok i altres c. Freistaat Bayern*, el Tribunal de Justícia (Gran Sala) resol una petició de qüestió prejudicial plantejada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, en la qual sol·licita criteris d'interpretació d'algunes disposicions del Reglament n° 1829/2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament⁴². En la sentència, el Tribunal de Justícia acull els arguments i la solució proposada per l'advocat general Yves Bot en les seves conclusions relatives al cas, presentades el 9 de febrer de 2011. En la mesura que el seu contingut va ser abordat en la crònica anterior, ens remetem a ella⁴³.

⁴¹ Sentència, § 40.

⁴² DO, L 268, de 18 d'octubre de 2003, p. 1.

⁴³ Vid. A. CARDESA SALZMANN, "Jurisprudència ambiental de la Unió Europea", *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 2011, Vol. II Núm. 1, pp. 52-59.